



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

REGISTRO N° 1663/22.4

//la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre del año 2022, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa **FSM 19680/2021/29/CFC1** del registro de esta Sala, caratulada: **"CONSTRUCTORA VISTAS y otros s/recurso de casación"**, de la que **RESULTA:**

I. Que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, con fecha 11 de agosto de 2022, resolvió revocar la providencia dictada el 4 de marzo 2022 por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de esa jurisdicción, que había dispuesto el embargo preventivo sobre los bienes y/o dinero de las personas físicas y jurídicas, Constructora Vista S.A., Cyse S.A., Zentra S.A., Montecito S.A., Fuentes y Asociados S.A., Nicolás Martínez Christensen, Lucila María Dighero, Joaquín Martínez Christensen, Tomás Martínez Christensen, Gabriel Marino, Castor Fuentes, Mariano Fuentes, Liliana Esther Paiva, Jesús Sebastián Vargas, Blanca Inés Rivero, Héctor Fabián Vulej, Verónica Elizabeth García, Martín Iván Marcelino Fernández, Romualdo Bernardino Paz e Ignacio José Anzorreguy, hasta cubrir la suma de pesos cien millones (\$ 100.000.000); la inhibición general de bienes en caso de que el monto no sea satisfecho, el bloqueo de sus cajas de seguridad y la prohibición de salida del país de las personas físicas.

II. Contra dicha decisión de la cámara *a quo*, la parte querellante -UIF- interpuso el recurso de casación que, tras ser denegado en la instancia



anterior, fue concedido por esta Alzada mediante recurso de queja (cfr. de esta Sala IV: Reg. Nro. 1096/22.4, rto. el 24/8/2022).

III. El recurrente, afirmó que la sentencia recurrida es equiparable a una resolución definitiva, en los términos del artículo 457 del C.P.P.N., en tanto es susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, y sustentó sus agravios en orden a las previsiones del art. 456 del C.P.P.N.

Comenzó su presentación casatoria señalando que el *a quo*, mediante una decisión arbitraria, ha dejado inoperativa la norma del art. 23 del Código Penal y el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, al considerar erróneamente que no se encontraban configurados los supuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios para el dictado de las medidas cautelares dictadas por el juez instructor en autos.

Indicó que en la sentencia recurrida no se analizó que los bienes y derechos en cuestión se tratan de instrumentos o efectos relacionados con los delitos que se investigan y que serían susceptibles de un futuro decomiso; y que no se evaluó que esos bienes eran producto de un perjuicio al erario público o bien producto de una obligación abusiva en detrimento del Estado Nacional que en principio ascendería a las sumas fijadas en la determinación de oficio mencionada.

Expuso que el relato de los hechos efectuado por el Ministerio Público Fiscal en oportunidad del art. 180 del C.P.P.N., y también por la parte querellante, que fueron tomadas en cuenta por el juez instructor para dictar las medidas cautelares solicitadas oportunamente, denota la complejidad que se presenta en el hecho investigado en autos, caracterizada por un entramado de operaciones que cuenta con la intervención de numerosos sujetos y llevadas a cabo en diversas jurisdicciones, siendo las mismas de naturaleza transnacional en algunos casos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

Al respecto, valoró que estas características no fueron tenidas especialmente en cuenta por el *a quo* al momento de analizar las medidas cautelares que dispuso el juez instructor para evitar la consolidación del provecho del delito y la recuperación de su producto.

Afirmó que durante la investigación en la causa del ilícito precedente se han llevado a cabo múltiples medidas tendientes a delimitar la primigenia hipótesis descripta en el requerimiento de instrucción y que a través de los elementos de prueba colectados se ha ratificado la verosimilitud del derecho que se pretende resguardar y que busca evitar que los imputados se deshagan de sus bienes.

Consideró que en virtud de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de delitos vinculados a la criminalidad compleja se han realizado reformas tendientes a establecer un sistema de medidas cautelares con fines de recupero de activos; que el art. 23 del C.P. prevé expresamente la posibilidad de que un eventual decomiso se pronuncie no solo contra las personas físicas involucradas, sino también contra las personas jurídicas que, aun sin encontrarse imputadas en autos todavía, se beneficiaron del producto y provecho de los delitos cometidos por sus miembros o administradores; y que la aplicación de dicha norma, junto al art. 518 del C.P.P.N., permite concluir que los jueces pueden adoptar medidas precautorias desde el inicio de las actuaciones, es decir, antes del auto de procesamiento, e incluso antes de la convocatoria a prestar declaración indagatoria, a los efectos de cautelar los activos pasibles de decomiso y los bienes necesarios para asegurar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. Así, manifestó que el *a quo* debió otorgarle a la cuestión un tratamiento más amplio.

Indicó que la verosimilitud en el derecho no está solamente dada por la determinación de oficio que vendría a evidenciar la evasión, sino en el propio



reconocimiento de los imputados quienes, en las escuchas telefónicas, reconocieron la realización de la facturación apócrifa.

Por otra parte, afirmó que no puede ignorarse el acogimiento al plan de regulación de la deuda tributaria, toda vez que con ese acto los imputados del delito precedente habrían reconocido el injusto penal, que sirve de base para legitimar una investigación por lavado de activos; que tal acogimiento fue realizado por las firmas EDEA y EDELAP, y que los informes de colaboración incorporados en la causa demuestran el estrecho vínculo entre todos los intervinientes, reforzando y sustentando la hipótesis acusatoria planteada.

Señaló que el dictamen fiscal al que remite el juez instructor en la resolución en la que dictó las medidas cautelares, da cuenta detallada de los vínculos y relaciones entre los distintos imputados que permite vislumbrar claramente la compleja maniobra perpetrada por este grupo de personas que, de manera organizada y valiéndose de un tramado de sociedades montado a tal efecto, habrían introducido al mercado dinero de procedencia ilícita derivado de las maniobras de evasión fiscal agravada en el marco de una asociación ilícita fiscal que se investiga en la causa FSM 58.258/2017.

Cuestionó que el *a quo* haya entendido que no se hallaba configurado el requisito de peligro en la demora, toda vez que refirió que existe fundada sospecha sobre la procedencia ilícita de los bienes, por lo que afirmó que resulta inminente y necesario dictar medidas cautelares a efectos de evitar la reinyección de esos bienes en el circuito financiero e impedir que el circuito económico delictivo continúe realimentándose.

Se agravió de que al no adoptar las medidas cautelares suficientes, no se podrá asegurar que los investigados no sigan beneficiándose con el producto del delito ni garantizar a la sociedad el retorno de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

aquellos bienes susceptibles de valor económico producidos por el ilícito, ya que el paso del tiempo, en este tipo de delitos económicos, atenta contra el éxito en el recupero de activos derivados de hechos ilícitos.

Resaltó que los estándares en materia de lavado de activos exigen que se investiguen estos delitos sin demora, y la resolución recurrida es contraria a los estándares nacionales e internacionales en materia de recupero de activos, que resultan en los compromisos adquiridos al suscribir la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24.072), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 25.632), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097); así como también la Recomendación N° 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional entre otras normas y tratados.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 bis, todos del C.P.P.N. -mod. Ley 26.374-, presentaron breves notas el señor Defensor Público Oficial, doctor Enrique María Comellas, en representación de Bernardino Paz Romualdo, la defensa particular de Liliana Esther Paiva, Constructora Vista S.A., Sebastián Jesús Vargas, Cyse S.A., Zentra S.A., Ignacio Anzorreguy e Iván Fernández Criado, y la defensa particular de Gabriel Marino, quienes solicitaron que se rechazara el recurso de casación interpuesto. También presentaron breves notas los apoderados de la parte querellante -Unidad de Información Financiera- manteniendo lo expuesto en la presentación casatoria y solicitando que se hiciera lugar al recurso.

Superada dicha etapa procesal, quedaron las



actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Corresponde señalar en primer término que el recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible toda vez que la resolución recurrida se trata de un pronunciamiento equiparable a definitivo.

En efecto, si bien en principio las decisiones atinentes a medidas cautelares -sea que las decreten, levanten o modifiquen- no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 313:116) y, en ese sentido, tampoco se encuentran comprendidas en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación, esta Sala IV se ha pronunciado por la admisibilidad del recurso al momento de resolver en autos el correspondiente recurso de queja presentado por la querella (cfr. reg. 1096/22.4, rta. el 24/8/2022), donde se resaltó que la naturaleza federal de los agravios planteados por el recurrente, luce, en principio, razonablemente fundado -art. 15 de la ley 48-, como así también que la demostración del agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el *a quo*, permite equiparar la resolución atacada a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así esta instancia (cfr. C.S.J.N. Fallos 328:1108 "Di Nunzio" y de esta Sala IV de la C.F.C.P., en lo pertinente y aplicable, causas CFP 12099/1998/T01/5/CFC2, Reg. 216/15.4 rta. el 27/2/2015 y FSM 6138/2020/7/RH1, Reg. 901/22.4 rta. el 5/7/22).

II. Cabe señalar que en autos se encuentra en investigación un grupo de personas y empresas que habrían introducido al mercado dinero de procedencia ilícita, cuando menos desde el 2015. Más específicamente, el Ministerio Público Fiscal al momento de formular el requerimiento en los términos del art. 180 del C.P.P.N. entendió que -según surgía





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

del expediente 58258/2017- podía afirmar que habría existido una asociación ilícita que utilizó facturas apócrifas mediante las cuales los imputados habrían documentado una serie de operaciones comerciales que nunca existieron y que tenían como destinatarios finales a las prestadoras de servicios de energía eléctrica EDENOR, EDEA y EDELEP, posibilitando así que por un lado, estas vieran disminuidas su carga tributaria y, por otro lado, que los sujetos responsables de las empresas que aparecen como proveedoras CYSE SA, ZENTRA, CONSTRUCTORA VISTA SA, MONTECITO SA, FUENTES Y ASOCIADOS SA y la contribuyente LILIANA PAIVA, efectuaran retiros de dinero en efectivo.

Al momento de fundamentar la medida cautelar cuestionada en autos, que importó en definitiva la prohibición de salida del país de los encausados, el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad y embargo por la suma de cien millones de pesos, el señor juez de instrucción recordó que el art. 305 del C.P. establece la posibilidad de adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos vinculados con las maniobras pesquisadas en autos, y que el art. 23 del C.P. establece expresamente que el juez podrá desde el inicio de las actuaciones ordenar medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de aquellos bienes que pudieran encontrarse relacionados con el ilícito investigado.

A su vez, señaló que el art. 518 del código de forma, en su tercera parte prevé la posibilidad de la ejecución de medidas de índole cautelar previas al procesamiento, si hubiere “peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que lo justifiquen”, de lo que, por consiguiente, se colige que en ocasiones el embargo procede excepcionalmente,



a pesar del presupuesto que dispone su primera parte.

Una vez individualizado el aspecto normativo, el instructor consideró -en consonancia con las operaciones detalladas por la UIF y que también destacó el señor fiscal de instrucción- que el peligro en la demora surgía de que *"el fin último, en principio, podría ser cimentar lo obtenido de forma ilegítima y a su vez evitar cualquier tipo de medida en detrimento de ese objetivo"* a lo que aunó que la urgencia que amerita el caso surge de que *"se encuentran incorporados elementos de convicción suficientes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis delictiva bajo estudio y los significativos montos económicos emergentes de la maniobra investigada, evidenciándose la razonabilidad de la viabilidad de las medidas cautelares propuestas."*

A su vez, apoyó el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad en la relevancia de los montos dinerarios involucrados y la prohibición de salida del país en que *"la posibilidad de que los responsables de las maniobras investigadas se habrían hecho de cuantiosas sumas de dinero (...) permitiría inferir una cierta capacidad para sustraerse al accionar de la justicia"*, concluyendo así que se encontraban verificadas las condiciones materiales y normativas de procedencia de las medidas cautelares dictadas.

Contra la mentada decisión las defensas plantearon recurso de apelación, oportunidad en la que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dispuso revocar la sentencia recurrida.

Para así resolver, el *a quo* entendió en orden a la verosimilitud del derecho que *"no se advierte del decreto atacado que el magistrado de grado haya consignado cuáles son, concreta y puntalmente, esos elementos de convicción para el dictado de las medidas dispuestas. Máxime si se sopesa el estado del sumario; esto es, los causantes no han sido convocados aún a prestar declaración indagatoria en los términos del Art. 294 CPPN, ni en este expediente ni en el FSM"*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

58.258/2017, según cada caso".

Por otra parte, en orden al peligro en la demora, refirió que tampoco se advierte fundado en forma precisa. Que no surge con claridad cuál sería la urgencia para la procedencia de aquéllas de este modo excepcional, y, más aún, si se tiene en cuenta que se trata de una investigación que emana de otra que lleva más de 5 años de trámite, con –prácticamente– los mismos intervinientes en ambas, y cuando la denuncia de la Unidad de Información Financiera que pretendiera motorizar la formación de esta pesquisa por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 303 del CP, data del mes de diciembre del año 2020.

Por su parte, con relación a la prohibición de salida del país, indicó que *"si bien el Art. 210, Inc. d), del CPPF establece que el representante del Ministerio Público Fiscal o la querella pueden solicitarla en cualquier estado del proceso, lo cierto es que las consideraciones efectuadas precedentemente alcanzan también a su dictado, por lo que seguirán la misma suerte"*.

Contra dicha resolución la Unidad de Información Financiera, en su carácter de parte querellante, interpuso el recurso de casación en estudio.

III. Sentado cuanto precede, cabe señalar que respecto al marco teórico en el que corresponde iniciar el estudio de la sustancial cuestión presentada ante esta instancia, no puede olvidarse que "lavado de dinero" es un delito organizado, transnacional y complejo.

Tal como ya tuve la oportunidad de recordar, organismos internacionales de los que la Argentina es parte como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos) o a nivel regional el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), emiten recomendaciones y protocolos para combatirlo. Y, en función de ello, para que los



Estados, sobre todo los de este hemisferio en donde el sistema financiero es considerado más vulnerable para el ingreso de activos de procedencia ilegal, modifiquen su legislación interna de acuerdo con las exigencias o estándares mínimos requeridos por aquellos.

Eso ha sido resultado del crecimiento de la delincuencia transnacional organizada, los medios con los que cuentan estas organizaciones para incorporar a las economías formales los fondos de origen ilícito (que lo transformaron en una actividad criminal muy compleja que se vale de inagotables técnicas y procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento) y la necesidad de la comunidad internacional de prevenir los efectos nocivos de estas conductas, que han hecho que se ponga particular empeño en la revisión de las recomendaciones del GAFI y su incorporación a las legislaciones nacionales a fin de actuar con eficiencia tanto en la prevención del lavado de activos, así como en el financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas vinculadas con los aquellos delitos que trascienden las propias fronteras de un país determinado (cfr. mi voto en la causa Nro. FRE 2021/2014/T01/62/CFC15: "SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ rec. de casación", Reg Nro. 106.18.4, rta. el 12 de marzo de 2018).

Específicamente, en su Recomendación 4, el GAFI, ha sostenido que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , ...o (d) bienes de valor equivalente.". Y que estas medidas deben incluir





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas."

Se prevé asimismo que "Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales."

Similares objetivos fijó el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (el citado GAFISUD).

Justamente, la regulación autónoma del delito de lavado de activos en el Código Penal argentino, ha sido inspirada en los compromisos de orden internacional que ha adoptado el Estado Argentino.

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado.

En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, es fundamental.



En efecto, con meridiana claridad se expone en el Informe de Gestión UIF 2016, que es precisamente el poder económico el que otorga poder real a la empresa criminal, a punto de que el poder territorial, el poder de fuego, el poder corruptor y hasta la posibilidad de acceso de delincuentes a cargos públicos, poniendo en riesgo la calidad institucional y democrática, entre otras “fortalezas” del crimen organizado, se sustentan y dependen todas del poder económico que el emprendimiento criminal resulta capaz de generar. Y es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de la esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.

En el aludido informe se puso de resalto que estos riesgos señalados fueron subestimados, al punto de que no se elaboró una estrategia eficaz que permitiera ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos ocupa: la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin.

A la luz del escenario descripto, no puede olvidarse que no sólo el Código Procesal Penal de la Nación prevé el embargo de bienes de los procesados, o civilmente demandados, con la finalidad de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas (que abarcan el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

El Estado Argentino se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos.

En consecuencia, la determinación del monto del embargo debe guardar el mayor correlato posible para garantizar esos rubros, teniendo en cuenta que el artículo 23 del Código Penal autoriza al juez a adoptar las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso puede recaer (cfr.: mi voto en la causa "LONG SANSEBERRIO, Carlos y otros s/recurso de casación", reg. 1976/19.4, rta. el 3/10/2019).

El recupero de las sumas que fueron objeto de los delitos investigados, con los intereses correspondientes, no es lo único que el embargo debe garantizar -junto con aquellos rubros dispuestos por el artículo 518 del C.P.P.N.-, en virtud de lo antes expuesto, sino también, y a la luz de lo normado por el citado artículo 23 del código de fondo, las ganancias que sean el producto o el provecho del delito.

Ahora bien, el juez a cargo de la instrucción del presente proceso ordenó las medidas de embargo dispuestas, y esa suma fue el resultado de considerar los distintos elementos de convicción recabados en autos que permiten cimentar, en principio y de forma provisoria conforme a la instancia procesal que se encuentra en desarrollo, la hipótesis delictiva en estudio y los significativos montos económicos emergentes de la maniobra investigada. Así, razonablemente consideró la complejidad de la maniobra perpetrada por los investigados en autos quienes de manera organizada y valiéndose de un entramado de sociedades montado a tal efecto, habrían introducido



al mercado dinero de procedencia ilícita derivado de las maniobras de evasión fiscal agravada en el marco de una asociación ilícita fiscal, que se investiga en la causa FSM 58.258/2017 -para ello se remitió a las operaciones detalladas por la UIF y el fiscal de instrucción-.

También remarcó que la mentada caución es la medida necesaria para lograr la identificación de los bienes y el recupero de los activos de origen ilícito producto de las maniobras investigadas en el caso, en forma oportuna, eficaz y urgente para evitar cualquier tipo de acción en detrimento de ese objetivo.

Por ello, y por entender que las operaciones efectuadas por los imputados habrían involucrado importantes movimientos dinerarios, dispuso trabar embargo sobre el dinero y/o bienes de: Constructora Vista S.A. (CUIT: 30714707686), Cyse S.A. (CUIT: 30715395335), Zentra S.A. (CUIT: 30714327506), Montecito S.A. (CUIT: 30712306781), Fuentes y Asociados S.A. (CUIT 30707457348), Nicolás Martínez Christensen (CUIT: 23176362219), Lucila María Dighero (27179027246), Joaquín Martínez Christensen (CUIT: 20368960110), Tomás Martínez Christensen (CUIT 20384564632), Gabriel Marino (CUIT: 20174924512), Castor Fuentes (CUIT 23937591969), Mariano Fuentes (DNI 17.546.243), Liliana Esther Paiva (CUIT 27225030710), Jesús Sebastián Vargas (CUIT: 20311339347), Blanca Inés Rivero (DNI 6.544.480), Héctor Fabián Vulej (DNI 16.492.016), Verónica Elizabeth García (DNI 18.445.429), Martín Iván Marcelino Fernández (DNI 20.011.465), Romualdo Bernardino Paz (DNI 20238385351) e Ignacio José Anzorreguy (CUIT 20240691702), hasta cubrir la suma de pesos cien millones (\$100.000.000); y también dispuso el bloqueo de las cajas de seguridad de las personas físicas y jurídicas en cuestión.

De tal forma, de la resolución de instrucción se advierte que el monto total de caución finalmente ordenado resulta razonable para cubrir los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

sustanciales aspectos que, a la luz de los principios expuestos precedentemente, la medida cautelar se encuentra destinada a resguardar, esto es: el recupero de las sumas que fueran objeto de las maniobras de lavado de activos imputadas, más los intereses que correspondan y el cumplimiento de la eventual pena pecuniaria, y el aseguramiento de la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos vinculados con las maniobras pesquisadas (art. 23 del C.P. y 518 del C.P.P.N.). Todo ello conforme a los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, referido *ut supra*.

En tal sentido, resulta adecuada y conforme a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad exigidos para el caso, la valoración efectuada por el *a quo* de las distintas circunstancias objetivas evidenciadas en el caso que le permitieron, en definitiva, establecer el monto de la caución finalmente dispuesto.

Por lo demás, analizadas las constancias de autos y los argumentos de las partes, entiendo que la decisión del juez instructor de disponer la prohibición de salida del país de Nicolás Martínez Christensen, Lucila María Dighero, Joaquín Martínez Christensen, Tomás Martínez Christensen, Gabriel Marino, Castor Fuentes, Mariano Fuentes, Liliana Esther Paiva, Jesús Sebastián Vargas, Blanca Inés Rivero, Héctor Fabián Vulej, Verónica Elizabeth García, Martín Iván Marcelino Fernández, Romualdo Bernardino Paz e Ignacio José Anzorreguy, se presenta razonable, necesaria y prudente de acuerdo al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones, la importancia de resguardar la sujeción de los imputados al proceso y el aseguramiento de la efectiva realización de la ley penal; y de conformidad con lo señalado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella, quienes enfatizaron que los



investigados se habrían hecho de cuantiosas sumas de dinero lo que permitiría inferir una cierta capacidad para sustraerse al accionar de la justicia.

La mínima restricción de la libertad que dicha medida comporta cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad que deben guiar el análisis de las medidas cautelares (en el mismo sentido, confr. esta Sala in re "SPANGENBERG, Hugo Alfredo s/prohibición de salida del país", causa nro. 13.235, Reg. Nro. 1625.12.4, del 13/9/2012).

La afectación se encuentra razonablemente fundada y, como ha quedado dicho, luce proporcional a la necesidad de mantener a derecho a toda persona sujeta a proceso sin que haya logrado el *a quo* demostrar que esta medida de carácter generalizable hubiera sido dirigida a los imputados de una manera arbitraria.

Así, la decisión de instrucción resulta razonable y se encuentra en consonancia con los fines cautelares y con la eventual finalidad de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido requeridos, y el recupero de las sumas que fueran objeto de las maniobras de lavado de activos imputadas, entre otras circunstancias razonablemente valoradas en autos; respetando, a su vez, los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad que deben imperar en este tipo de decisión. Por ello, resultan adecuadas las medidas dispuestas por el juez instructor.

A lo expuesto, cabe aunar que en función de la naturaleza del delito investigado -lavado de activos- las medidas dispuestas por el instructor resultan acordes a los compromisos asumidos por nuestro país en materia de recupero de activos y combate de la delincuencia económica por la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24.072), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 25.632),





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097). Así como también conformes a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, entre otras normas y tratados. Normas internacionales que exigen que los Estados hagan su mayor esfuerzo por esclarecer los hechos delictivos a que se refieren, y que demandan una especial atención de la justicia para evitar que peligre el correcto desarrollo del proceso, y para asegurar el eventual recupero de los activos de origen ilícito (cfr. en lo pertinente causa "CIS, María Julia y otros s/recurso de casación" reg. 1128/22.4 rta. el 29/8/2022).

Por ello, resulta razonable y adecuada la conclusión del juez instructor por la que dispuso el monto de embargo oportunamente fijado, así como el bloqueo de las cajas de seguridad y la prohibición de salida del país dispuesta, las que han sido determinadas conforme a lo expuesto oportunamente por el fiscal de instrucción y la querella, en el marco de la prudencia que exige la apreciación de una medida cautelar de estas características conforme las constancias obrantes en autos, tal como ya fue explicitado.

En base a lo expuesto, se observa que la resolución impugnada no ha sido sustentada razonablemente, en tanto carece de los fundamentos jurídicos mínimos y necesarios que la descalifican como acto judicial válido.

IV. Por ello corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte querellante, la Unidad de Información Financiera, y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida y estar a lo resuelto en primera instancia, y remitir la causa al tribunal de origen a sus efectos, sin costas en la instancia (art. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Javier Carbajo dijo:

I. Habida cuenta de que la admisibilidad del recurso de casación interpuesto ya ha sido resuelta con motivo de la vía directa articulada por la parte (cfr. FSM 19680/2021/29/RH1, reg. 1096/22, del 24 de agosto de 2022) y no advirtiéndose en el caso la necesidad de un nuevo examen acerca de su procedencia formal, corresponde dar tratamiento a los agravios esgrimidos por la parte recurrente.

II. Vale recordar que, de acuerdo con el requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal a tenor de lo normado en el art. 188, la presente causa tiene por objeto investigar a una presunta *"...asociación ilícita que utilizó facturas apócrifas mediante las cuales se documentaron operaciones comerciales que nunca existieron y que tenían como destinatarias finales a las compañías prestadoras de servicios de energía eléctrica EDENOR, EDEA y EDELAP, posibilitando así que por un lado, estas vieran disminuida su carga tributaria (extremo sobre el cual cabe remitirse a las resoluciones determinativas de oficio efectuadas en el marco de la causa de origen), y por otro lado, que los sujetos responsables de las empresas que aparecen como proveedoras CYSE SA, ZENTRA SA, CONSTRUCTORA VISTA SA, MONTECITO SA, FUENTES Y ASOCIADOS SA y la contribuyente Liliana Paiva efectuaran retiros de dinero en efectivo..."*.

Sobre este último aspecto -es decir, los presuntos retiros de fondos-, el Fiscal señaló que *"...la operatoria descripta posibilitó a un grupo de personas obtener ilícitamente cuantiosas sumas de dinero, resultando que los retiros en efectivo dificultaron o más bien hicieron que se pierda cualquier tipo de posibilidad de efectuar una trazabilidad de los fondos así habidos..."*.

Asimismo, añadió que *"...el fraccionamiento de los montos obtenidos en cheques al portador, sobre cuyo destino se explayó el suscripto ut supra, también ha sido un medio idóneo para introducir dichos activos*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

en el mercado, con la consecuente pérdida de su rastro, en tanto se habrían conducido por mercado informales.

Por otra parte, cuanto menos en el caso de Fuentes y Asociados, nos encontramos ante la posible aplicación del dinero obtenido mediante la maniobra ilícita descrita, a fondos de inversión, permitiendo así introducir dichos activos al circuito legal y luego recuperarlos con apariencia lícita.

De igual modo, se observa la suscripción de Cedines efectuada por Lucila Dighero; la compra en efectivo de inmuebles efectuada respectivamente por Joaquín y por Nicolas Martínez Christensen; el deposito de USD 37.000 efectuado por Jesús Sebastián Oscar Vargas y su casi inmediato retiro, todo lo que podría considerarse resultado de la aplicación de fondos obtenidos ilícitamente merced a la maniobra que aquí se describio".

En atención a lo expuesto, el Fiscal de grado señaló que cobraba virtualidad la hipótesis de lavado de activos propiciada por la Unidad de Información Financiera y requirió la realización de diversas medidas de prueba como así también la imposición de las cautelares que aquí se controvierten, con sustento en lo normado en los arts. 23 del C.P. y 518 del C.P.P.N.

Asimismo, en el punto 13 de su requerimiento peticionó la oportuna convocatoria de los denunciados en los términos del art. 294 del C.P.P.N.

El 4 de marzo del corriente año el Juez de grado hizo lugar a las cautelares solicitadas por el Fiscal.

En cuanto a las de corte patrimonial rememoró la normativa aplicable (arts. 23 y 305 del C.P. y 518 C.P.P.N) y señaló "...entiendo acreditada la situación de urgencia que torna procedente la decisión que aquí se dispone, de conformidad con lo requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal ya que, en la presente causa se encuentran incorporados elementos



de convicción suficientes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis delictiva bajo estudio y los significativos montos económicos emergentes de la maniobra investigada, evidenciándose la razonabilidad de la viabilidad de las medidas cautelares propuestas...".

En consecuencia, mandó a trabar embargo hasta cubrir la suma de cien millones pesos (\$100.000.000) respecto de cada uno de los investigados: Constructora Vista S.A. (CUIT: 30714707686), Cyse S.A. (CUIT: 30715395335), Zentra S.A. (CUIT: 30714327506), Montecito S.A. (CUIT: 30712306781), Fuentes y Asociados S.A. (CUIT 30707457348), Nicolás Martínez Christensen (CUIT: 23176362219), Lucila María Dighero (27179027246), Joaquín Martínez Christensen (CUIT: 20368960110), Tomás Martínez Christensen (CUIT 20384564632), Gabriel Marino (CUIT: 20174924512), Castor Fuentes (CUIT 23937591969), Mariano Fuentes (DNI 17.546.243), Liliana Esther Paiva (CUIT 27225030710), Jesús Sebastián Vargas (CUIT: 20311339347), Blanca Inés Rivero (DNI 6.544.480), Héctor Fabián Vulej (DNI 16.492.016), Verónica Elizabeth García (DNI 18.445.429), Martín Iván Marcelino Fernández (DNI 20.011.465), Romualdo Bernardino Paz (DNI 20238385351) e Ignacio José Anzorreguy (CUIT 20240691702).

En relación con la prohibición de salida del país expuso que *"...los responsables de las maniobras investigadas se habrían hecho de cuantiosas sumas de dinero lo que permitiría inferir una cierta capacidad para sustraerse al accionar de la justicia..."*.

Aquella decisión fue impugnada por la defensa de Mario Iván Marcelino Fernández Criado, Liliana Esther Paiva, Ignacio José Anzorreguy, Jesús Sebastián Vargas, *"Constructora Vista SA"*, *"Zentra SA"*, *"Cyse SA"*, Gabriel Marino, *"Montecito SA"*, Lucila María Dighero, Nicolás, Joaquín y Tomás Martínez Christensen, Mariano Fuentes, Castor Fuentes, *"Fuentes Asociados SA"*, Blanca Inés Rivero, Herman Fabián Bulej





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

y Romualdo Bernardino Paz.

El 7 de julio del corriente año el tribunal a quo acogió favorablemente los recursos incoados por las defensas.

Para así decidir, los jueces señalaron, en primer orden, que las cautelares son de carácter excepcional y que, procesalmente, su imposición se halla prevista al momento del dictado del auto de procesamiento (art. 518 del C.P.P.N.).

En virtud de ello, estimaron que de disponerse tales medidas de manera previa a tal hito procesal la decisión debía estar rigurosa y expresamente fundamentada, en particular respecto del peligro en la demora y la existencia de elementos de convicción, pues no se encuentran ligada al estado de sospecha y de valoración judicial de responsabilidad que se expresa en el ya referido auto de procesamiento.

En el caso bajo examen apreciaron que no se había satisfecho adecuadamente aquella manda.

Observaron que *"...no se advierte del decreto atacado que el magistrado de grado haya consignado cuáles son, concreta y puntalmente, esos elementos de convicción para el dictado de las medidas dispuestas. Máxime si se sopesa el estado del sumario; esto es, los causantes no han sido convocados aún a prestar declaración indagatoria en los términos del Art. 294 CPPN, ni en este expediente ni en el FSM 58.258/2017, según cada caso..."*.

En cuanto al peligro en la demora advirtieron que tampoco se había evidenciado la urgencia en su imposición destacando que *"...se trata de una investigación que emana de otra que lleva más de 5 años de trámite, con –prácticamente– los mismos intervinientes en ambas, y cuando la denuncia de la Unidad de Información Financiera que pretendiera motorizar la formación de esta pesquisa por la presunta comisión del delito previsto en el Art. 303 del CP, data del mes de diciembre del año 2020..."*.



Contra dicha decisión la querella interpuso el recurso que ahora se examina.

Durante la audiencia ante esta Cámara Federal de Casación Penal el recurrente y las defensas de los acusados presentaron breves notas sustitutivas, más no lo hizo el representante del Ministerio Público Fiscal.

II. En primer lugar, en cuanto a los agravios expuestos, a diferencia de lo señalado por la querella, cierto es que la interpretación propiciada por el *a quo* no torna inoperativa las normas invocadas por la acusación ni inhibe la posibilidad de la aplicación de medidas cautelares de manera anticipada en los albores de una causa, de modo previo al dictado del auto de procesamiento o aun del acto de declaración indagatoria.

En efecto, de la lectura del resolutorio se verifica, por un lado, que los jueces de la Cámara Federal apreciaron que tal posibilidad es jurídicamente admisible pero enfatizaron que demanda un plus de fundamentación que no se había comprobado en autos y, por el otro, remarcaron que el temperamento adoptado no importaba emitir opinión sobre el fondo -es decir, sobre la viabilidad de las medidas-.

Desde esta perspectiva, los agravios en punto a la interpretación normativa no pueden tener recepción favorable pues, a diferencia de lo señalado por la querella, la decisión no ha asumido la imposibilidad del dictado de las medidas, sino que, con acertado criterio, dado el evidente carácter excepcional que las informan, ha requerido una rigurosa ponderación que las legitime y sustente oportunamente.

En este caso, observo que, tal como señala el *a quo*, la decisión del juez de la etapa temprana no ha ostenta un pormenorizado examen respecto de cada uno de los imputados y de su presunta intervención de los hechos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

En efecto, la imposición del embargo en igual suma a cada uno de ellos -la de cien millones de pesos- sin mediar ponderación alguna en orden a su grado de participación en los hechos se verifica irrazonable.

Vale señalar que no todos los investigados ocupaban igual rol dentro de las empresas relevadas ni parecen haber tenido una intervención análoga en cuanto al presunto lavado de activos que pueda justificar el dictado de una cautelar sensiblemente abultada en igual extensión.

Tan es así que se han detallado operaciones de aplicación de fondos, reputados como ilícitos, de menor o mayor cuantía que difieren notoriamente según los casos de cada uno de los denunciados.

Así las cosas, el estándar exigido por el *a quo* no es irrazonable pues importa, cuanto menos, detallar mínimamente la relación de cada uno de los investigados con las operaciones o la operatoria de lavado y sus montos aproximados a efectos de que la medida cautelar, en su extensión, no sea desproporcionada y afecte el derecho de propiedad.

Es que a priori no es equiparable el caso de una persona jurídica que el de una física, el de un accionista minoritario que el de un mayoritario ni el del asesor contable o el de los directivos o los administradores de hecho.

En este aspecto, la falta de convocatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N. no es un requisito ineludible para la imposición de las medidas y, en efecto, la resolución no asume tal hipótesis, de adverso a lo postulado por el recurrente, sino que aquel acto, en la medida que se anoticia el hecho que se pretende enrostrar y la prueba obrante, coadyuva a la fundamentación que demanda cualquier cautelar y que, en el caso, no se ha verificado autónomamente al momento de su dictado por parte del juez de grado.

En esa dirección, el examen normativo expuesto en el recurso, preciso y riguroso, no empece



la corrección de la solución adoptada que en nada obsta a la pretendida aplicación de las cautelares pero que reclama una fundamentación que, de momento, no se ha llevado a cabo.

De igual modo, el peligro en la demora invocado debe ser respaldado suficientemente en elementos objetivos de la causa para evitar la irrazonable afectación del patrimonio de los ciudadanos.

En lo que hace a la hipótesis de blanqueo de capitales, el requerimiento de investigación que reclama las medidas, data del 10 de enero de 2022.

Al respecto, es evidente la premura en su imposición para su asegurar su necesaria efectividad que, en el caso, se encuentra inescindiblemente vinculada con el carácter fungible del dinero, su fácil aplicación, conversión y circularización y el hecho de que su tardía imposición las tornaría estériles e inocuas, frustrando el objetivo previsto por el legislador en el ya citado art. 305 del C.P.

En este aspecto, las consideraciones efectuadas por el recurrente no permiten desatender las críticas en orden a la falta de fundamentación vertidas respecto de su extensión y aplicación a cada uno de los investigados pues no puede prescindirse del carácter excepcional y extraordinario que por sustancia ostentan las medidas cautelares.

Así, tal como la propia decisión cuestionada indica, en la medida que no adelanta opinión sobre el fondo de la cuestión, nada impide a la querella solicitar la imposición de las medidas satisfaciendo los lineamientos expuestos.

Habré de agregar que las exigencias de fundamentación expuestas en el decisorio de la instancia anterior son contestes con los principios y los requerimientos expuestos con detalle en el nuevo Código Procesal Penal Federal que, si bien no resulta de momento aplicable, constituye una clara referencia interpretativa que no puede soslayarse.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

En ese orden, el nuevo digesto procesal establece como pautas generales en materia de medidas restrictivas de derecho "*...los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad...*" (art. 16).

Por lo demás, las obligaciones internacionales invocadas en materia de criminalidad organizada transnacional -ligadas al narcotráfico o terrorismo- o bien, en materia de corrupción tampoco, de momento, se observan aplicables pues en la hipótesis de acusación no se han esgrimido elementos indicativos de hechos de aquella particular naturaleza.

Sentado ello, en cuanto a la prohibición de salidas del país -en la medida que importa una injerencia en la libertad ambulatoria de aquellas expresamente previstas en el art. 210 del C.P.P.F.- tampoco habrá de prosperar el remedio incoado por la querella.

Al respecto, la manda del art. 305 del C.P. no puede extrapolarse a las medidas de coerción personal.

De adverso, su aplicación requiere una fundamentación suficiente en orden al peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, tal como se encuentra expresamente contemplado en los artículos 221 y 222 del C.P.P.F. -aplicables al *sub lite* en virtud de lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal-.

Ello importa, no solo la examinación de las concretas circunstancias del caso y la naturaleza del hecho, sino también la evaluación de las condiciones personales de cada uno de los imputados y su comportamiento procesal.

Desde esa óptica, tal como ha sido relevado por el *a quo*, no se evidencia la realización de aquel examen en la decisión del magistrado de grado.

En este aspecto, observo que el recurrente no



ha rebatido las consideraciones efectuadas por los integrantes del tribunal anterior ni ha expuesto elementos concretos que en el caso de cada uno de los imputados justifique razonablemente aquella restricción, resultando inhábil la invocación genérica de la gravedad de los hechos ventilados.

No puedo dejar de señalar que las medidas de coerción personal deben ser examinadas con particular contemplación de las circunstancias individuales de cada uno de los sujetos involucrados siendo que, en la presente, no ha mediado siquiera audiencia en los términos del art. 294 del C.P.P.N. ni se ha esbozado un examen previo de tales parámetros.

En definitiva, la resolución impugnada se encuentra suficientemente sustentada, y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos; 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779).

III. Con estas consideraciones doy mi voto en orden a: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la querella (Unidad de Información Financiera), sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos y las conclusiones exteriorizadas por el distinguido juez que abre el acuerdo, Dr. Gustavo M. Hornos, adhiero a la solución que propone.

En mérito al acuerdo que antecede, este Tribunal, por mayoría,

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante Unidad de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
FSM 19680/2021/29/CFC1

Información Financiera y, en consecuencia, **REVOCAR** la resolución recurrida, **ESTAR** a lo resuelto en primera instancia y **REMITIR** la causa al tribunal de origen, a sus efectos. Sin costas en la instancia (art. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada N° 5/19, C.S.J.N.) y remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.

Fecha de firma: 02/12/2022

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA

